



PROGRAMA DOCTORADO
Cuestiones Actuales del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas

Trabajo de investigación realizado en el curso
Acompañamiento académico para la investigación

**CIENCIA JURÍDICA: DERECHO AGRARIO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO NICARAGÜENSE**

Autor(a): MANUEL ERNESTO MONTIEL SILVA

Tutor Académico: DR. JAIRO JOSÉ GUZMÁN GARCÍA

Agosto, 2016

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. UCA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Programa de Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho”
Período de docencia



**CIENCIA JURÍDICA: DERECHO AGRARIO EN
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
NICARAGÜENSE**

Artículo de investigación presentado por:
MANUEL ERNESTO MONTIEL SILVA

Tutor académico:
DR. JAIRO JOSÉ GUZMÁN GARCÍA

Managua, Nicaragua, 19 de agosto 2016

RESUMEN

A través del presente artículo se resalta al Derecho agrario dentro del ordenamiento jurídico nacional y su importancia para el desarrollo jurídico, social y económico del país. Para ello fue necesario de previo, aclarar antes acerca de la cientificidad de la ciencia jurídica o del derecho, como parte de las ciencias sociales, humanas o del espíritu. Por otro lado se demuestra la asimetría existente entre el desarrollo de la actividad agropecuaria nacional plasmada en la legislación nacional (Constitución, leyes, decretos, acuerdos y normas técnicas) y el tratamiento académico científico que se le da al derecho agrario en el contexto nacional; no así en el internacional. Finalmente se resalta la importancia del desarrollo académico científico de esta rama del derecho.

PALABRAS CLAVE

Derecho / agrario / autonomía / importancia

ABSTRACT

Through this article highlights the agricultural law within the national legal system and its importance for social and economic development. This required to clarify before about the scientific nature of legal science or law, as part of the social sciences, human or spirit. On the other hand the asymmetry is demonstrated between the development of the national agricultural activity reflected in national legislation (Constitution, laws, decrees and technical standards) and academic and scientific treatment that is given to agrarian law in the national context; not internationally. Finally the importance of scientific academic development of this branch of law is highlighted.

KEY WORDS

Law / agrarian / autonomy / importance

TABLA DE CONTENIDO

Introducción. 1. Conocimiento y conocimiento científico. 1.1 Conocimiento. 1.2 Conocimiento científico. **2. Ciencia.** **3. Ciencias sociales, humanas o del espíritu.** 3.1 Aproximación al surgimiento de las ciencias sociales. 3.2 Objeto de las ciencias sociales, humanas o del espíritu. **4. Ciencia jurídica o del derecho.** 4.1 objeto del Derecho. 4.2 Método del Derecho. **5. Ordenamiento jurídico.** 5.1 Definición. 5.2 El ordenamiento jurídico. 5.3 Ramas del Derecho o del ordenamiento jurídico. 5.4 El Derecho civil como rama del Derecho privado. **6. Derecho agrario.** 6.1 Origen del Derecho agrario. 6.2 Definición del Derecho agrario. 6.3 Fundamento de la importancia del Derecho agrario en Nicaragua. 6.4 Instituciones de Derecho agrario. **Resultado y aportes.**

INTRODUCCIÓN

Dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense existe un conjunto de normas (Constitución, leyes, decretos y normas técnicas) encaminadas a regular y condicionar la actividad agropecuaria nacional; sin que ello signifique el desarrollo del Derecho agrario en el ámbito académico y científico.

¿Qué implica dicha asimetría? Implica la desestimación de la importancia del Derecho agrario para el desarrollo jurídico del país, y por lo tanto para un mejor desarrollo de la actividad agropecuaria nicaragüense.

Pero ¿Cómo se ha hecho posible que en Nicaragua, siendo un país agropecuario, exista poco o nulo interés por el desarrollo del Derecho que regula esta actividad? ¿Acaso el desarrollo del Derecho agrario no coadyuvaría a la modernización del ordenamiento jurídico nicaragüense? ¿Ocupa la actividad agrícola y pecuaria un lugar importante en el desarrollo jurídico, social y económico de Nicaragua?

La respuesta a la última interrogante –y desde una perspectiva social y económica– parece obvia. Por supuesto que la actividad agropecuaria ocupa un lugar no solo importante sino también estratégico para el desarrollo social y económico.

Cabe destacar que 135 de los 153 municipios de Nicaragua se dedican a la agricultura; y además el 72% de la población rural mayor de 15 años en el país tiene como empleo principal la misma actividad (Bouroncle et al. 2014).

Considerando lo anterior es posible deducir que Nicaragua es un país productor de alimentos (animales y vegetales); y que una parte importante de la población se dedica a la actividad agrícola y pecuaria.

Quizá por ello existe todo un marco constitucional enderezado a la regulación y protección de la agricultura nicaragüense. Así en múltiples artículos de la Constitución Política nicaragüense, se recogen un conjunto de principios, derechos y deberes del Estado, de la empresa privada, de las cooperativas y de productores individuales; de garantizar la seguridad agroalimentaria, la producción agropecuaria, la conservación de los suelos, de las aguas, de nuestros bosques, etc.

Por tanto el desarrollo de la actividad agropecuaria en nuestro país es de suma importancia., ya que si dicha actividad se desarrolla plenamente muy

probablemente habrá: mayor producción de alimentos y un mejor nivel de vida para el porcentaje de la población rural que se dedica a tal actividad.

"La meta de los productores del país es alcanzar cada vez mayores rendimientos productivos" (Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua – UPANIC, 2016, p. 4). Esto refleja la necesidad de ir modernizando no solo la infraestructura agropecuaria sino también el andamiaje jurídico que regula, condiciona y ordena dicha actividad.

La agricultura ocupa un lugar especial dentro de la ciencia del Derecho. Ya que "Hay una relación directa entre el grado de evolución agrícola y la respectiva legislación existente, porque a medida que se pone empeño en hacer progresar la agricultura, se siente la necesidad de dictar leyes que induzcan o condicionen las correspondientes actividades" (Alvarenga, s/f, p.2).

Nicaragua no es la excepción. En marzo del año 2015 la Asamblea Nacional promulgó la Ley No. 881 Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Esta ley tiene como objetivo recopilar, ordenar, depurar y consolidar el marco jurídico vigente de la materia SSAN. En ella se encuentran todos los instrumentos jurídicos vigentes y no vigentes que regulan y condicionan la actividad agropecuaria nacional.

Responder a las otras dos preguntas planteadas al principio, se requiere demostrar previamente cuál es el camino que conduce hasta la autonomía de aludida disciplina dentro del ordenamiento jurídico.

El panorama indica que la desestimación de la importancia del desarrollo del Derecho agrario en la actualidad y dentro del contexto nacional, se debe a circunstancias de toda índole: políticas, sociales, culturales y principalmente académicas.

Además no se debe soslayar que en algunas universidades nicaragüenses se enseña por Derecho agrario tan solo uno o dos instituciones del mismo (La reforma agraria: redistribución de la propiedad productiva y el cooperativismo: como una de las formas de la empresa agraria); y en otras universidades la materia del Derecho agrario dejó de existir, como lo es el caso de la Universidad Centroamericana - UCA.

La imperiosa necesidad de dar respuestas inmediatas a las problemáticas que en materia penal, civil y de familia se venían viviendo desde hace décadas en el ámbito nacional; exigieron que los esfuerzos legislativos, académicos y científicos se centraran en ellos, con la finalidad de darle respuesta integral a los mismos. El resultado es por todos conocido: la modernización del sistema penal; la emancipación del Derecho de familia del Derecho civil y la modernización del sistema de familia; y recientemente la muy importante modernización del procedimiento civil.

El Derecho agrario es una rama del Derecho con la singularidad de que las normas atinentes “regulan el ejercicio de las actividades agrarias, así como las actividades que les son directamente complementarias, con miras a obtener en el campo la más racional producción y el más alto grado posible de justicia social” (Alvarenga, s/f).

Aludida rama del Derecho ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos cincuenta años en el ámbito académico y científico regional e internacional; y en Nicaragua ha quedado en el olvido.

Es por lo anterior que los objetivos de la presente investigación son: develar la asimetría existente entre el desarrollo de la actividad agropecuaria nicaragüense reflejada en la legislación nacional y el desarrollo del Derecho agrario; demostrar la importancia del desarrollo del Derecho agrario para el buen desarrollo de la actividad agropecuaria nicaragüense; y descubrir cuál es el estado doctrinal de su autonomía científica en el ámbito internacional.

En consideración del objeto de estudio de la presente investigación y de los objetivos planteados; he decidido realizar una investigación teórica e implementar el método histórico-lógico, por cuanto, me permitirá “enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo, destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso...” (Villabella, 2014, p. 94).

Para la obtención de la información y su registro, consultaré los recursos bibliográficos disponibles en la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana. Además consultaré las bases de datos de acceso remoto y de libre acceso disponible en el world wide web, que contienen un universo de libros, revistas indexadas y especializadas, ensayos y artículos científicos.

Para el registro de la información que será analizada y utilizada en la fundamentación posterior, pongo en práctica el uso de fichas bibliográficas y de contenido, mismas que permiten una clasificación de los argumentos por temáticas. Una vez fichada la información procederé al análisis del contenido, esto permitirá clasificar, validar y contrastar la información para su uso posteriormente.

I. Conocimiento y conocimiento científico

Para estar en condiciones de determinar acerca de la autonomía del *Derecho* como *ciencia*, y por consiguiente de la autonomía del *Derecho agrario* como una rama de ésta; considero pertinente exponer *grosso modo* acerca del origen de la ciencia y su desarrollo.

Para empezar, las primeras interrogantes que debemos formularnos y respondernos son: ¿Qué es ciencia? ¿Por qué se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales, humanas o del espíritu? ¿Qué ciencias son consideradas ciencias sociales, humanas o del espíritu, y por qué? ¿Es la ciencia jurídica realmente una ciencia? ¿Cuáles son sus ramas y por qué?

Los cuestionamientos anteriores invitan a escudriñar en el origen de la ciencia para encontrar sus respuestas, y es ahí donde se encuentra que todo inició por establecer la diferenciación entre conocimiento (habitual, común o empírico) y conocimiento científico. ¿Por qué a partir de ahí? porque la diferencia entre uno y otro, permite deducir como es que se desarrolla el segundo –es decir el conocimiento científico– asunto esencial si queremos comprender lo que es *ciencia*.

Entonces, para establecer la diferencia entre un conocimiento y otro, de previo debo precisar que es *conocimiento*, y por ello, a continuación proporciono una definición sencilla, para luego dar una más elaborada. Esto permitirá posteriormente comprender lo que es *ciencia*. Justo lo que se necesita para responder a los cuestionamientos planteados con anterioridad.

1.1 Conocimiento.

El diccionario de la Real Academia Española - RAE (2016) define que *conocimiento* es la “acción y efecto de conocer; y también es el entendimiento, la inteligencia o la razón natural” (online). Adviértase aquí que el término adolece de cierta ambigüedad ya que primariamente refiere a actos de conocer y por otro refiere a su contenido.

Advertido de la ambigüedad del término, en 1997 Martínez-Freire en su artículo *El giro cognitivo en filosofía de la ciencia* ofreció una ideografía del término cuando ejemplificó que: “En efecto, puedo decir que conozco pero también puedo hablar de mis conocimientos, siendo ambas maneras de expresión no sólo normales sino también legítimas” (p.105).

Es por lo anterior que acotando el significado de conocimiento que sugiero asumir en el presente artículo, es el de *conocimiento* como actividad. Es decir una actividad del pensamiento presente en los humanos.

Superada la ambigüedad del término conviene entonces precisar qué tipos de *conocimientos* existen y cuál de ellos es el que puede considerarse *científico*.

1.2 *Conocimiento científico*

Acorde a lo anterior he pretendido dejar claro que se puede hablar de *ciencia* una vez que hemos comprendido el significado de *conocimiento* y quiénes son capaces de generarlo. Entonces, si el *conocimiento* es una actividad del pensamiento que los humanos son capaces de realizar, es pertinente preguntarse ¿Qué ha hecho el hombre con el conocimiento? A continuación la respuesta.

Es un hecho que el conocimiento como actividad del pensamiento comenzó a jugar un rol importante en el deseo del hombre de descifrar y comprender su entorno: el mundo real en el que se encuentra inmerso siendo parte de él. Por lo que desde aquí empieza a vislumbrarse dos objetos por descubrir y comprender: a la naturaleza en primer lugar y a la sociedad posteriormente.

"Toda sociedad humana siempre ha generado conocimiento sobre su entorno y su realidad, física y social. Es un aspecto que surge de la necesidad misma que tiene el

hombre de tratar de explicar o comprender el medio que habita." (Chaparro, 2001, p.19).

Coincidiendo con lo anteriormente expuesto, en el 2014 Villabella citando a Bunge (2007) expuso que "mientras los animales inferiores sólo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo, y sobre la base de su inteligencia intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable" (p.5).

A pesar de que los ejemplos recién expuestos solo muestran cómo en distintos momentos se interpreta lo mismo acerca de la utilidad del conocimiento; también permiten visualizar superficialmente la existencia de un consenso respecto a deducir que el hombre en uso de su facultad –de conocer– y sobre la base de sus necesidades, ha venido descubriendo el medio que habita. Es decir que, lo que el hombre ha venido haciendo con el conocimiento es descubrir y comprender el mundo natural y posteriormente el social.

El *conocimiento científico* a diferencia del *conocimiento* (habitual, común o empírico) se caracteriza por ser: explicativo, sistémico, verificable, predictivo, falible y útil. Es explicativo porque busca comprender y explicar los objetos y fenómenos que estudia; es sistémico porque está conformado por un conjunto de proposiciones interrelacionadas lógicamente entre sí; es verificable porque se parte de una hipótesis y tesis que se comprueban y demuestran; es predictivo porque trasciende los hechos que analiza y revela como pudo haber sido el pasado o conjetura sobre el futuro; es falible porque toda conclusión es temporal y refutable; y es útil porque los conocimientos que genera aportan soluciones y transforman la realidad. (Villabella, 2014).

El conocimiento habitual no posee las características recién expuestas y puede generarse en la práctica cotidiana. *Verbi gratia*: todos saben que si se lanza al aire una piedra muy pronto caerá al suelo; pero la explicación del porque la piedra es atraída rápidamente al suelo es una explicación que sólo se puede dar desde la física.

Entonces, acorde a lo anterior y a lo expuesto por García (2008), el saber cotidiano es aquel que se adquiere en la experiencia cotidiana, y es la forma común de conocer que se adquiere a través del trato directo con los hombres y con las cosas.

Este tipo de conocimiento se posee sin haberlo buscado o estudiado, sin aplicar un método y sin haber reflexionado sobre él.

Para este autor, la cualidad que se le puede asignar al conocimiento científico es que, “aunque esté influido por el conocimiento común, lo supera y sobrepasa porque no le basta la captación de lo externo, ni el sentido común... por lo que el conocimiento científico profundiza y va más allá del conocimiento ordinario” (García, 2008, p. 207).

A modo conclusivo, se puede decir entonces que dentro de los atributos que el *conocimiento* debe tener para que sea considerado como *conocimiento científico*: éste deber ser explicativo, sistémico, falible, predictivo y útil, sólo es posible obtenerlo a través de la aplicación de un método.

II. Ciencia

Una vez superada la ambigüedad del término *conocimiento* y establecida la diferencia entre *conocimiento habitual* y *conocimiento científico* –aunque a grandes rasgos– estamos en condiciones de comprender lo que se entiende por *ciencia*, sin soslayar la discusión que alrededor de tal definición se desencadenó desde la edad media hasta la edad contemporánea.

Pero antes de mostrar en que consistió la discusión alrededor de lo que debe ser considerado como científico, es oportuno mencionar que definir *ciencia* no es una tarea sencilla, entre otros motivos, porque la expresión es ambigua, debido a que el término puede ser utilizado tanto para describir a las actividades consideradas científicas, como para el conjunto de proposiciones que constituyen el resultado de tales actividades (Mabel, 2011). Por lo que aclaro al lector que cuando haga referencia a *ciencia*, haré referencia a ese conjunto de proposiciones o lo que es lo mismo, al conjunto de conocimientos que poseen atributos descritos en la parte conclusiva del punto anterior.

Una vez acotado el uso del término, a continuación expongo *grosso modo* cuál fue el origen de la discusión y en qué consistió.

El origen de dicha discusión se observa al contemplar el panorama de la historia de la concepción de la ciencia en occidente, en donde se encuentra que existen dos grandes tradiciones científicas: la aristotélica y la galileana.

Estas dos tradiciones son dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una explicación que se quiera denominar científica. La primera pone el énfasis en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente; para la segunda la explicación científica es explicación causal (Mardones & Ursúa, 1982, p. 16, 34).

Estos mismos autores (Mardones & Ursúa) hacen un resumen bastante inclusivo de la discusión en distintos siglos y entre distintas escuelas filosóficas que se denominaron naturalistas, positivistas y antipositivistas, entre otras. Concluyen que “La explicación científica ni es sólo causalista, ni sólo teleológica o hermenéutica. El postulado de la complementariedad se va abriendo paso y transitando de un mero deseo a concreciones metodológicas justificadas” (p.35).

Entonces, una vez conscientes de la discusión que alrededor de la definición de ciencia se desencadenó, del rechazo del exclusivismo de una tradición y otra, y de la complementariedad necesaria entre ambas; a continuación muestro algunas concepciones de ciencia que pueden ser consideradas válidas.

Para Mabel (2001) “Saber científico, supone un sistema de conocimientos, ciertos y probables, respecto de un determinado sector de objetos de la realidad universal, a los que es posible acceder a través de una adecuada fundamentación metodológica” (p. 14).

Para García (2008) –después de haber analizado las aportaciones que algunos filósofos de la ciencias como Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend hicieron– es posible inferir una conceptualización de *ciencia*; y a modo conclusivo en su artículo *Aproximación Epistemológica al Concepto de Ciencia* esbozó que, “la ciencia sería un saber racional, sistemático, metódico, crítico, parcial y, por ende selectivo; una representación que es sometida a la experiencia, a la racionalidad y a la coherencia” (p.209).

Para Villabella (2014), ciencia es aquella que puede enunciarse como el conjunto de conocimientos sistematizados y obtenidos a través de la aplicación de métodos cognitivos y elaborados mediante procesos lógico-rationales, que en su nivel

superior de abstracción se enuncian en conceptos, leyes, teorías y paradigmas con los cuales se explican los fenómenos naturales y sociales

Se debe de notar que las conceptualizaciones recién expuestas, poseen aquellos atributos que el conocimiento científico posee y que lo diferencia del conocimiento habitual. Entonces, a estas alturas es válido inferir que conocimiento científico y ciencia son dos conceptos que van de la mano indisolublemente. Razón por la cual al principio de este apartado, advertí que entenderíamos ciencia una vez determinada la diferencia entre conocimiento habitual y conocimiento científico.

Por lo tanto, coincido con la visión de ciencia del profesor Carlos Maue Villabella, por considerar que *ciencia* es un conjunto de conocimientos ordenados lógicamente entre sí, de tal forma que adquieren carácter sistémico. Estos conocimientos son obtenidos a través de la aplicación de métodos, que permiten su repetición y por ende su verificación. De dichos conocimientos se deducen premisas, conceptos, leyes y teorías que explican los distintos fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad.

III. Ciencias sociales, humanas o del espíritu.

Dilthey¹ (1944) sostuvo con amplia razón que las ciencias del espíritu son un todo independiente junto a las ciencias de la naturaleza; y en favor de su argumento expuso que junto a las *ciencias de la naturaleza* se ha desenvuelto espontáneamente un grupo de conocimientos que se hallan enlazados entre sí por razones de afinidad y de fundación recíproca. Expone además que dentro de lo que se puede llamar ciencia social, se encuentra a: la historia, la economía política, las ciencias del derecho y del estado, la ciencia de la religión, el estudio de la literatura y de la poesía, del arte y de la música, la concepción filosófica del mundo, ya sean como teoría, ya como conocimiento del transcurso histórico, componen tales ciencias.

¹ W. Dilthey (1833-1911), alumno de Ranke, quiere fundamentar la historia y demás ciencias que se relacionan con el hombre en cuanto ser histórico y social. Descubrió que la teoría del conocimiento de las ciencias naturales no hacía justicia a su peculiaridad.

“¿Dónde reside el parentesco entre las mismas? Todas estas ciencias se refieren a los hombres, a sus relaciones entre sí y con la naturaleza exterior” (Dilthey, 1944, p.91).

3.1 Aproximación al surgimiento de las ciencias sociales.

Respecto del surgimiento de estas ciencias, existe consenso en que el auge del interés en otras disciplinas que estudian al hombre y al medio en el que está inserto –la sociedad– se ubica a mediados del siglo XIX. Es dentro de este centenario (1801 - 1900) que se reconoce la existencia de las ciencias sociales, humanas y del espíritu. Así lo confirman Mardones & Ursúa en 1982, cuando adujeron que la aparición expresa de estas disciplinas aconteció en el siglo XIX. “Es decir en el momento histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la vida de los hombres en ella con sus múltiples relaciones, no era ni algo claro, ni dado de una vez por todas” (p. 15).

Una vez que estas disciplinas cogieron relevancia en el ámbito académico-científico, se desató una polémica acerca de la cientificidad de las mismas.

Ante dicha polémica, fue Dilthey (1966), quien en su obra *Introducción a las Ciencias del Espíritu* sostuvo que, el conjunto de los hechos espirituales que caen bajo este concepto de ciencia suele dividirse en dos miembros, uno de los cuales se designa con el nombre de ciencia natural; para el otro no existe ninguna denominación universalmente reconocida.

Dilthey (1966) se adhirió “al uso terminológico de aquellos pensadores que denominan ciencias del espíritu a esa otra mitad del *globus intellectualis*” (p. 40); en clara referencia a *ciencias del espíritu*. Las razones para adherirse a la expresión *ciencias del espíritu* fueron por un lado, porque esta denominación llegó a ser habitual y generalmente comprensible; y por otro, porque comparando dicho término con todas las demás denominaciones inadecuadas entre las que se pudo elegir, parecía que fue la menos inadecuada.

Las otras expresiones propuestas hasta ese momento fueron: ciencias de la sociedad, morales, históricas, de la cultura. Además porque todas estas expresiones

referían de manera muy imperfecta al objeto de estudio (el género humano, la realidad histórico-social, el medio en el que está inserto el hombre), defecto del que no se escapó la expresión preferida por Dilthey (ciencias del espíritu). Dichas expresiones fueron estrechas respecto al objeto que trataban de señalar.

“El motivo de que arranca el hábito de separar estas ciencias como una unidad de las de la naturaleza radica en la hondura y en la totalidad de la autoconciencia humana” (Dilthey, 1966, p.41). Encuentra el hombre en la autoconciencia: una soberanía de la voluntad, una responsabilidad de los actos, una facultad de someterlo todo al pensamiento y resistir a todo encastillado de la libertad de su persona, por las cuales se distingue de la naturaleza entera.

La realidad histórico social para Dilthey es lo que permite englobar bajo el nombre de ciencias del espíritu a esa otra parte del *globus intellectuallis* (Dilthey, 1966).

3.2 Objeto de las ciencias sociales, humanas o del espíritu.

“El objeto de estas ciencias no es lo externo o ajeno al hombre, sino el medio en el que el hombre está inserto” (Mardones & Ursúa, 1982, p.57)

En palabras de López (2008) “se trata de un conjunto de saberes que tienen en común la comunidad de su objeto, a saber, el género humano, frente a las ciencias de la naturaleza que tiene como objeto la naturaleza externa” (409).

3.3 Autonomía de las ciencias sociales frente a las ciencias de la naturaleza.

La distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu para Wilhelm Dilthey, residía además en que todas las ciencias del espíritu refieren a una misma realidad: el género humano como ser social. “Una de las características naturales del hombre es su tendencia a vivir en sociedad” (Anda, 1999, p.22), y por eso el humano es un ser social.

Lo anterior permite inferir que, la ciencia del espíritu "Se trata de un conjunto de saberes que tienen en común la comunidad de su objeto, a saber, el género

humano, frente a las ciencias de la naturaleza que tienen como objeto la naturaleza externa" (López, 2008, p. 409).

En el 2009 Villabella con mucha claridad expuso que: por Ciencias sociales se considera al conjunto de disciplinas y áreas del conocimiento que estudian a la sociedad en sus distintas facetas, a las diferentes relaciones que en ella se entablan y al ser humano como arquitecto y protagonista de éstas; por ello han sido también reconocidas como ciencias del espíritu o ciencias de la cultura.

Dentro de esta ciencias se encuentran algunas disciplinas que tienen un indiscutible estatus de ciencia particular, y a saber son: la antropología, arqueología, sociología, ciencias políticas, economía, ecología, geografía humana y social, historia, lingüística, pedagogía, etnología, demografía, derecho y psicología; mientras que en otras su personalidad como disciplina autónoma es más discutible, lo cual guarda relación con el caudal de conocimientos que acumula o con perspectivas de enfoque (Villabella, 2009).

Las ciencias sociales se caracterizan por los siguientes rasgos: sus objetos de estudio son los sistemas y procesos sociales creados por el hombre y de los cuales forma parte, lo cual condiciona su naturaleza subjetiva; tienen un carácter predominantemente idiográfico, en tanto el hombre es un ser único, irrepetible y singular; los fenómenos, sistema y procesos que estudia, reciben la influencia de disímiles factores exógenos, lo cual las hace complejas y sinérgicas; sus objetos de estudio son imposible de aislar de la tupida red de interrelaciones en las que se encuentran, al no ser mediante abstracción mental, por lo que necesitan ser vistos desde una perspectiva holística; parten del supuesto de que el hombre, como centro de estudio, es necesario contemplarlo como ser social, consciente, autodeterminado y mediatizado por factores sociales, psicológicos, culturales e históricos.; la complejidad, diversidad, inexactitud y variabilidad de sus objetos, condiciona que exista una diversidad de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos para investigar, a la vez que determina la imposibilidad de que éstos proporcionen una medición exacta (Villabella, 2009).

Para Mabel (2011) citando a Heinrich Rickert (1863–1936), en un intento de independizar aún más las ciencias sociales de las ciencias naturales, introdujo el

concepto de valor en la metodología de las ciencias sociales, humanas o del espíritu, sin dar aún una respuesta a la cuestión de qué es un valor. (p.22, 23).

Rickert citado por Mabel (2011), precisó que a la “división lógica de las ciencias en generalizadoras e individualizadoras, se añade una división objetiva, según consideren su objeto libre de valor y de sentido (ciencias aturales) o referido a valores y por ello, con sentido (ciencias histórico culturales)” (p.22).

Entonces, acorde a lo aquí expuesto, es posible resaltar que dentro de las ciencias sociales, humanas o del espíritu se encuentran: la antropología, arqueología, sociología, ciencias políticas, economía, ecología, geografía humana y social, historia, lingüística, pedagogía, etnología, demografía, derecho y psicología; debido al objeto en común que cada una estudia y que pueden ser subsumidos a una misma realidad: el género humano.

IV. Ciencia jurídica o del Derecho.

El Derecho debe reunir ciertos elementos que son condición sin la cual no se puede hablar de ciencia jurídica. Estos elementos son: el objeto y el método.

4.1 Objeto del Derecho

Para Austin² (1832) en su obra *Province of Jurisprudence Determined* enfatizó que “el derecho positivo es el objeto de la ciencia del derecho” [trad. propia] (p.B). y aclaró que por derecho positivo se entiende el derecho establecido por un superior político a un inferior.

Traigo a colación la determinación del objeto de la ciencia jurídica brindada en el siglo XIX por Jhon Austin, debido a que esta concepción del objeto es aun ampliamente aceptada si se circunscribe el derecho positivo al ordenamiento jurídico, aunque éste último no sea solamente eso.

² Jhon Austin (1790-1859) jurista británico.

El problema del objeto del Derecho “es uno de los puntos fundamentales de la Ciencia jurídica pues según lo que le atribuyamos como objeto, será el método que elijamos para su estudio y la teoría que construyamos para explicar ese objeto” (Muñoz, 1996, p.94).

Cabe destacar que “según como entendamos el objeto estudiado será el método que vayamos a emplear y en congruencia de lo anterior estará la teoría para llevar a cabo dicho estudio, así como la teoría resultante de la investigación realizada” (Muñoz, 1996, p.94).

4.2 Método del Derecho.

Otro elemento de la estructura de la ciencia es *el método*, por tanto lo es también de la Ciencia jurídica o del Derecho. El Derecho no posee un método exclusivo –al igual que el resto de las ciencias–, pues se considera que el método es universal y puede llegar a algunas concreciones generales, porque racionalmente los seres humanos coincidimos por naturaleza, en la forma de aproximarnos a los objetos; los que si van particularizando son los procedimientos y las técnicas que llegan a individualizarse, para la investigación de un determinado objeto (Muñoz, 1996).

Muñoz (1996) insiste en que el método es lo más general en la investigación, que incluye procedimientos, procesos y técnicas más específicas, sin que método, procedimientos y técnicas sean lo mismo, sino que mutuamente se dan servicios y apoyo durante la investigación (p.95). Al respecto este autor aclara que el método no es una ruta estricta pre-establecida a la cual el investigador debe sujetarse inexorablemente, y que al contrario es un camino que se va construyendo, rectificando y completando, al mismo tiempo que se realiza la labor investigadora (Muñoz, 1996).

El método en consecuencia es flexible, de tal modo que se perfecciona continuamente, se racionaliza, se retroalimenta, por lo que durante el desarrollo de la investigación puede ser contrastado constantemente haciendo las rectificaciones o reorientaciones correspondientes (Muñoz, 1996).

En conclusión puede decirse que el método es el conjunto de pautas o procedimientos generales que se siguen en la actividad científica.

V. Ordenamiento jurídico.

Los primeros en resaltar la realidad del *ordenamiento jurídico* fueron los partidarios de la teoría del Derecho como institución, en oposición a la teoría normativa. Así en la doctrina se destacan Maurice Hauriou (jurista y sociólogo francés) y Santi Romano (jurista italiano) con su obra *El ordenamiento jurídico*.

Así mismo lo consideró igualmente el profesor La Torre (2010) en su obra *Law as Institution* cuando expuso que “Los textos más significativos acerca de la *teoría institucionalista* del Derecho, son los trabajos de Maurice Hauriou y Santi Romano” [trad. propia] (p. 98).

Sintetizando un poco, se puede decir que los partidarios de la teoría institucionalista del Derecho tacharon de inadecuada e insuficiente la concepción del Derecho como norma. Evidentemente opuesta a la visión positivista que insistía en la independencia del Derecho de toda consideración valorativa.

En tal sentido, Ansuátegui (2006) expuso que el “institucionalismo jurídico” es una corriente de pensamiento muy influyente que ha tenido lugar desde finales del siglo XIX. El “institucionalismo jurídico” es uno de los intentos de encontrar una vía de salida a los problemas creados por una concepción estrecha del Derecho, concebido fundamentalmente como mandato del "superior político" o del Estado, y de la ciencia jurídica vista como ejercicio puramente lógico y sistemático sobre normas e "institutos”.

5.1 Definición

Las normas jurídicas suelen estudiarse como entidades que tienen su propia estructura, su vida, su forma de expresión, que se dividen en clases o especies, etc.

Su eficacia opera dentro de un conjunto en el que se encuentran integradas: el ordenamiento jurídico (García & Fernández-Galiano, 1999).

Los autores recién referidos exponen, en su obra *Iniciación al Derecho*, que esta expresión tiene tres acepciones: la territorial, la histórica y la sectorial. La acepción territorial significa que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que están vigentes en un determinado territorio. La acepción histórica, significa que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que estuvieron vigentes en el pasado en una concreta organización, *verbi gratia*: el ordenamiento jurídico romano. Y la acepción sectorial, significa que el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que regulan un cierto tipo de relaciones, como el ordenamiento jurídico laboral, por ejemplo, es el complejo normativo que se ocupa de las relaciones de trabajo (García & Fernández-Galiano, 1999).

“En cualquier caso, el ordenamiento jurídico hace siempre referencia a una pluralidad normativa, está integrado por varias normas, y no sólo varias, sino una multitud de ellas” (García & Fernández-Galiano, 1999, p. 84).

En palabras sencillas, el ordenamiento jurídico puede comprenderse como: “el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres y en cuyo cumplimiento se puede emplear la fuerza física del Estado” (Anda, 1999).

En definitiva es preciso recordar y reiterar que actualmente el ordenamiento jurídico no solamente está compuesto por normas, sino también, por principios, valores y conceptos, íntimamente interrelacionados entre sí, de forma armónica y coherente.

Lo anterior se consolida con lo que el profesor Guzmán (2002) expuso al respecto cuanto argumentó que: “el ordenamiento jurídico en su sistematización no sólo se ve integrado por normas sino también por principios y enunciados” (p.11).

5.2 El ordenamiento jurídico.

Partiendo de que el ordenamiento jurídico hace siempre referencia a una pluralidad normativa, es de comprenderse que con esa cantidad de normas, de poco serviría a efectos prácticos un ordenamiento si no ofreciera una cierta

estructura y orden interno que de algún modo oriente a quien se adentre en él. Por lo que “El ordenamiento jurídico es un sistema, esto es, un todo cuyas partes –las normas– están relacionadas entre sí de un modo armónico y respondiendo a una determinada lógica interna” (García & Fernández-Galiano, 1999, p.85).

Según Fernández & Ruiz (1997) hay ciertos requisitos que suelen exigirse para poder hablar de sistema, desde un punto de vista lógico. Se entiende que la primera condición de un sistema cualquiera y, por lo tanto, de un sistema normativo, es la de que estén determinados los criterios que permiten establecer qué elementos pertenecen al sistema.

Lo anterior implica que la concepción del ordenamiento jurídico como sistema, implica la exigencia teórica de contar con criterios que permitan la identificación y clasificación de las normas que componen un determinado conjunto normativo (Fernández & Ruiz, 1997).

Un sistema está presidido por unos principios o líneas generales que dan sentido al conjunto y a los que responden los elementos que lo integran. Esto también sucede en el ordenamiento jurídico, ya que está configurado de acuerdo con unos criterios rectores o principios inspiradores a los que deben acomodarse las normas (García & Fernández-Galiano, 1999).

Para Fernández & Ruiz (1997), “La presencia de normas de organización, hace que el Derecho aparezca no ya como un simple agregado de normas colocadas unas al lado de las otras, sino como un conjunto organizado de normas, es decir, como ordenamiento jurídico” (p.147).

El ordenamiento jurídico debe ser coherente. Con esto quiero decir que el conjunto de normas, principios y valores de concepto que configuran el ordenamiento jurídico deben guardar armonía unas respecto de otras. No deben contradecirse “de modo que no haya unas que prohíban conductas ordenadas por otras” (García & Fernández-Galiano, 1999).

En teoría, la coherencia del ordenamiento debería ser absoluta; pero en la práctica son tan abundantes las normas, que no debe sorprendernos encontrar normas contradictorias, dando lugar a antinomias entre ellas y en ocasiones en sí mismas, y creando el problema de cuál será aplicable. Problemas que afectan a los jueces y magistrados, que son los encargados de la aplicación del derecho. ¿Cómo se

resuelven esos casos que rompen la coherencia del ordenamiento jurídico? La ciencia del Derecho ofrece tres principios: El principio de la temporalidad; el principio de la jerarquía; y el principio de la especificidad (García & Fernández-Galiano, 1999).

5.3 Ramas del Derecho o del ordenamiento jurídico.

Con esta expresión nos referimos a determinadas esferas más o menos homogéneas de regulación jurídica que corresponden a sectores individualizados de la vida social. Por tanto, si existen diferentes ámbitos con peculiaridades en su regulación jurídica es porque existen relaciones sociales diferentes que exigen un tratamiento jurídico específico a cada uno de esos sectores de la vida social (Añón & Bea, 1997).

Las dos clases de relaciones, entre los particulares y de éstos con el Estado, originan las respectivas concepciones sobre el Derecho privado y el Derecho público. Esta tradicional bipartición de Derecho ha tenido diversas interpretaciones y sentidos en las diferentes épocas históricas (García & Fernández-Galiano, 1999, p.120).

Para De Cossio y Corral (1991), la clasificación del Derecho en público y privado se trata de un “planteamiento histórico que surge en determinado momento, y que tiene seguramente, su origen en el nacimiento de las unidades urbanas” (p.46); en referencia a las formación de las ciudades y sus reglas de convivencia.

Estos autores asumen que en un primer momento, en la vida rural comunitaria, las libertades de los individuos son absolutas; pero que cuando estos individuos se encuentran dentro de la ciudad, se ven afectados en sus libertades, por lo que dejan de ser absolutas por los asuntos de la colectividad.

De lo anterior se visualiza que en las circunstancias sociales descritas, existen normas necesarias para la vida en sociedad y normas necesarias para la organización de la misma. Lo que dio lugar a la clasificación de las normas en públicas o privadas o lo que es lo mismo Derecho público o privado.

Con independencia de las numerosas teorías dualistas, subjetivas o pluralistas que pretenden explicar esta división atendiendo al sujeto, al objeto o contenido o a la

forma, se considera que la relación es de Derecho público cuando el Estado interviene en ella como supremo ente ordenador en virtud de su soberanía. En cambio si el Estado trata o litiga con el particular en un plano de igualdad, que muchas veces es más ilusorio que real, entonces la relación se considera de derecho privado (García & Fernández-Galiano, 1999).

En la actualidad se puede sostener “que la a priori, absoluta escisión entre Derecho privado y público, es hoy sólo relativa y que responde a una presentación sistemática de los aspectos a través de los que se puede explicar el Ordenamiento jurídico del Estado” (Guzmán, 2008, p.9).

“En términos muy generales puede decirse que el Derecho público se caracteriza porque en él existe un ejercicio del poder del Estado” (Añón & Bea, 1997, p.174). Las normas que poseen este atributo de “público” van dirigidas a la organización del Estado y su actividad, y a sus relaciones como entes públicos con los particulares o con otros Estados.

Las normas por las que el Estado organiza la tutela judicial de los derechos, las que prefijan la tipología delictual, las que tiene por objeto regular las relaciones de la Administración con los particulares, así como su funcionamiento interno, y, las que imponen el régimen de tributación; son normas de Derecho Público (García, 1995) Es decir, que dentro de esta rama del ordenamiento jurídico, se encuentran al Derecho Penal, Derecho procesal, Derecho administrativo, Derecho fiscal o tributario, entre otros.

“El Derecho privado es aquel que regula las relaciones entre particulares, es decir, aquella que en ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal público” (Añón & Bea, 1997, p.174).

Son normas de Derecho Privado las que persiguen el establecimiento, garantía y consecución de fines individuales. Es decir que son aquellas que tienen por objeto establecer los casos por cuya virtud se ha de provocar el desplazamiento de bienes o derecho de una persona a otra, las que configuran las formas de transitar el patrimonio de una persona a sus herederos, las que regulan las formas de tenencia y disfrute de las cosas, las que establecen las reglas a que han de atenerse los comerciantes en sus relaciones profesionales y los tipos de sociedades, etc. (García, 1995).

Por lo que, acorde al párrafo precedente, se confirma que en el ámbito del derecho privado se incluye al Derecho civil, el mercantil, patrimonial, etc., y los que regulan las relaciones entre los particulares en un plano de igualdad aunque estén sometidos a normas públicas de control.

Habiendo comprendido acerca de la división o escisión del *ordenamiento jurídico* o del *Derecho* a continuación trato grosso modo una de sus ramas: el Derecho civil.

5.4 El Derecho civil como rama del Derecho privado.

“El Derecho civil es un sector o parte del ordenamiento jurídico, que está compuesto por el sistema de normas y de instituciones que están encausadas a la defensa de la persona y de sus fines dentro de la comunidad” (Díez-Picazo, 1996, p.37).

Las personas tienen diversos fines dentro de la sociedad, y dentro de ellos un fin económico. Es el fin económico –aunque no exclusivamente– el que ha impulsado e impulsa a los individuos interrelacionarse en busca de la satisfacción de sus propias necesidades de toda índole. Por tanto, podría asumirse que el Derecho civil es el conjunto de normas que protege inclusive el fin económico de las personas, de los sujetos en sociedad.

El derecho civil históricamente coincide con el derecho privado y regula las relaciones entre los ciudadanos teniendo un amplio contenido, del que se han ido separando diversas ramas y materias (García & Fernández-Galiano, 1999).

Lo que García & Fernández-Galiano alegan, conduce a asumir que el Derecho civil fue desde un inicio heterogéneo. Es decir que su contenido fue bastante amplio por lo que abarcó instituciones de toda índole.

En una aproximación al objeto de dicho Derecho, puedo decir y coincidiendo con Añón & Bea (1997) que:

La opinión más generalizada entiende que el Derecho civil en la actualidad tienen por objeto las normas que regulan las relaciones entre los particulares considerados como personas en general y no con referencia a situaciones o actividades específicas que estén sometidas a otras ramas del Derecho (p. 189).

“El derecho civil desarrollado con gran precisión en el periodo de la codificación, corresponde a un modelo de sociedad muy distinto al actual y por tanto el derecho civil heredero de los códigos decimonónicos tiene grandes disfuncionalidades en nuestros días” (Añon & Bea, 1997, p.189).

En la actualidad con la creciente invasión del derecho público y el profundo cambio de las circunstancias sociales y económicas, el Derecho civil está en crisis, en primer lugar por un progresivo proceso de desintegración: muchas disciplinas que a él pertenecieron adquieren carácter científico y contenidos propios, como el Derecho mercantil, agrario, registral, aeronáutico, hipotecario, etc. (García & Fernández-Galiano, 1999).

“El principio de la autonomía de la voluntad, que inspiraba el régimen de los bienes y la propiedad, los contratos y la herencia, se subordina a las normas públicas en aras de los superiores intereses de la colectividad” (García & Fernández-Galiano, 1999, p.131). Un ejemplo de esto lo encontraremos en el artículo 44.2 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, ya que establece que: en virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a sus ejercicios le impongan las leyes.

Debo aclarar que he decidido hacer particular referencia al Derecho civil como rama del derecho privado, precisamente por su carácter heterogéneo. Esta rama del derecho es abarcadora de diversas instituciones, que con el paso del tiempo, se han ido desgajando del Derecho civil –aunque no por completo– logrando integrarse en otras ramas del Derecho. *Verbi gratia*: la institución de la familia dejó de ser parte del Derecho civil, para declarar su autonomía y un estudio y tratamiento especial, muy distinto al que se le daba dentro del civil.

El Derecho agrario también ha exigido autonomía del Derecho civil, ya que este último –al menos en el ordenamiento jurídico nicaragüense– abarca instituciones que en esta época también pertenecen al Derecho agrario, aunque con un enfoque diferente. Por ejemplo la institución de la propiedad.

VI. Derecho agrario

6.1 Origen del Derecho agrario

En comparación con el desarrollo del Derecho privado, el Derecho agrario es una de las disciplinas jurídicas más recientes. Su sistema de normas jurídicas, relacionadas inicialmente con la agricultura, comienza a formarse a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, por la confluencia de varios factores económicos, sociales, jurídicos, políticos e ideológicos, y hasta culturales. En esto coinciden Ulate (2009) y Zeledón (2015).

Enrique Ulate nos explica que “antes del cristianismo, las leyes divinas, el derecho consuetudinario indígena, el derecho romano, el derecho feudal, y el régimen liberal diseñado por Napoleón con el proceso de codificación, ya trazaban algunas normas respectivas a la agricultura” (Ulate, 2009); aunque esto no podría dar lugar a considerar que el Derecho agrario ya existía por tal razón desde la antigüedad.

Por lo que el origen del Derecho agrario se ubica históricamente en el periodo post capitalista y nunca como Derecho civil o figuras similares en cuyo centro se ubicó la propiedad en diversas épocas pre capitalistas (Zeledón, 2015).

Según el maestro Zeledón desde inicios del siglo pasado se plateó un debate histórico que sigue vigente en la actualidad. Aludido debate consistió en darle respuesta a la pregunta ¿si el Derecho agrario es autónomo o nó?

El profesor Zeledón en su artículo *De las escuelas clásicas a los institutos y la teoría general, hacia una teoría pura del Derecho agrario contemporáneo* destaca que el debate original acerca de la autonomía del Derecho agrario se encuentra en la *Rivista* entre 1928 y 1931; entre G. G. Bolla y Ageo Arcangeli, en Italia.

6.2 Definición de Derecho agrario

En una primera aproximación a la definición de Derecho agrario, a través de la doctrina latinoamericana se encuentra basta información que da definiciones de un tipo u otras alrededor de la disciplina que me ocupa.

Sin embargo no es prioridad entrar en el estudio de todas las concepciones que sobre Derecho agrario se ha proporcionado desde una óptica y la otra. Por lo que procedo –en esta primera etapa de la investigación– a exponer tan solo una definición que ha sido extraída de un conjunto de definiciones proporcionadas por otros juristas.

Es Ruiz quien en 1987 en su obra *Derecho Agrario Revolucionario. Bases para su estudio*, recoge las definiciones (de Derecho agrario) que –según él– son las más sobresalientes en esa época. Y después de exponer un aproximado de catorce definiciones proporcionadas por juristas mexicanos e internacionales, decide extraer sus elementos más característicos; y a partir de ahí ofrecer una definición propia que incluyen tales elementos.

Alguno de los elementos que Ruiz (1987) extrae de diversas conceptualizaciones son las siguientes: el carácter especial y autónomo del conjunto de normas jurídicas que integran el derecho agrario; su referencia al cultivo del campo, a la organización territorial rústica, a las industrias agrícolas, a la propiedad rústica, a la agricultura, a la explotación agrícola, a la actividad agraria y a la producción agropecuaria; su finalidad es la de garantizar los intereses de los individuos y de la colectividad, asegurar la función social de la propiedad, lograr la justa distribución de la propiedad rústica en beneficio de quienes las trabajan, etc.

Acorde a lo anterior, dichos elementos permitieron a Ruiz (1987) concluir –sin ánimos de perpetuidad– que el derecho agrario será el “conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad en el campo derivada de la tenencia y explotación de la tierra, con el fin primordial de obtener el bien de la comunidad en general, y en especial de la comunidad rural” (p.35).

No obstante, a pesar de que Mario Ruiz Massieu se tomó la tarea de consolidar una amplia gama de definiciones acerca de lo que es Derecho agrario; por otro lado Zeledón ya en el 2015 expone que “quienes se arriesgan a lanzar definiciones del

Derecho agrario están cometiendo el error de identificar un objeto en proceso de cambio, en consecuencia esas definiciones son transitorias” (p.9).

La definición requiere necesariamente tener tres elementos: el objeto de la disciplina ubicado al centro, otro al principio encargado de decir qué es y otro al final capaz de indicar qué no es el derecho agrario (Zeledón, 2015).

El agrario no es el Derecho de la propiedad, mucho menos el de la tierra. Porque en el centro del Derecho civil se encuentra la propiedad. En el derecho comercial los contratos. En el Derecho de Trabajo la subordinación (Zeledón, 2015).

En el núcleo del agrario se encuentra la empresa agraria, en tanto un conjunto de actividades organizadas económicamente por el empresario agrario para la producción agrícola, dentro de un ciclo biológico cuyas actividades conexas por el desarrollo mismo lo han convertido en un “Derecho de Trinidad” conformado por el Derecho de la agricultura o fitotécnico, el derecho zootécnico y el derecho forestal. (Zeledón, 2015).

6.3 Fundamento de la importancia del desarrollo del Derecho agrario en Nicaragua.

¿Ocupa la agricultura un lugar importante en el desarrollo jurídico, social y económico de Nicaragua?

Desde una perspectiva social y económica, por supuesto que la agricultura ocupa un lugar, no solo importante, sino también estratégico para el desarrollo social y económico nacional y mundial.

Cabe destacar que, en la publicación *La Agricultura en Nicaragua y el Cambio Climático*, Bouroncle et al. (2014) mediante una ilustración que rotuló: *Mapa 2. En Nicaragua, los granos básicos y el café son los cultivos que mayor extensión ocupan*; ofrece datos estadísticos que me permiten deducir que 135 de los 153 municipios de Nicaragua se dedican a la agricultura.

En la misma publicación Bouroncle et al. (2014) citando a INIDE (2005) advierten que:

El 72% de la población rural mayor de 15 años en Nicaragua tiene como empleo principal la agricultura, según los datos provistos por el último censo de población y vivienda (INIDE, 2005), alcanzando tasas mucho mayores en los municipios más alejados de los centros urbanos del país (p.5).

A pesar de que lo anterior es un dato estadístico que tiene muchos años desactualizado, demuestra que –entre otros rubros no menos relevantes– Nicaragua es un país altamente productor de alimentos (animales y vegetales); y que una parte importante de la población se dedica a la actividad agropecuaria.

Quizá por ello existe todo un marco constitucional que está concebido a la regulación y protección de la agricultura nicaragüense. Así en los artículos 44.2, 44.3, 60.2, 60.4, 63, 89.3, 98.2, 101, 105, 106, 109, 110 y 111 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, se recogen un conjunto de principios, derechos y deberes del Estado, la Empresa privada, las cooperativas y productores individuales; de garantizar la seguridad agroalimentaria, la producción agropecuaria, la conservación de los suelos, de las aguas, de nuestros bosques, etc.

Por tanto el desarrollo de dicha actividad en nuestro país es de suma importancia, ya que si dicha actividad se desarrolla muy probablemente habrá: mayor capacidad productiva, un mejor nivel de vida para el porcentaje de la población rural que se dedica a la agricultura y desarrollo agropecuario.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua - UPANIC, en el III Congreso Nacional Agropecuario celebrado en la ciudad de Managua el 14 de Junio del 2016, dejó claramente establecido que la modernización del sistema de producción nacional sigue siendo el objetivo del agro nicaragüense y que "La meta de los productores del país es alcanzar cada vez mayores rendimientos productivos" (p. 4). Esto me permite visualizar que el rumbo de la actividad agropecuaria nicaragüense responde al planteamiento global.

Desde el punto de vista jurídico, la agricultura también ocupa un lugar especial dentro de la ciencia del Derecho. Al respecto Alvarenga (s/f) expone que

Hay una relación directa entre el grado de evolución agrícola y la respectiva legislación existente, porque a medida que se pone empeño en hacer progresar la agricultura, se siente la necesidad de dictar leyes que induzcan o condicionen las correspondientes actividades (p.2).

Nicaragua no es la excepción; muestra de ello en marzo del año 2015 se promulgó la *Ley No. 881 Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN)*; esta ley “consiste en la recopilación, compilación, ordenamiento, análisis, depuración, consolidación, actualización y sistematización del ordenamiento jurídico vigente del país, el que se elaborará por materia y se aprobará por Ley” y “tiene como objeto recopilar, ordenar, depurar y consolidar el marco jurídico vigente de la materia Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN).

Con la aprobación de la agenda para el desarrollo después del 2015 y posteriormente con la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre del año dos mil 2015; se plantearon 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y entre ellos el de “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. Esto implica que los países miembro de las Naciones Unidas –como lo es Nicaragua– están comprometidos con el cumplimiento de los objetivos planteados.

La visión es que de aquí al 2030 se logre “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas...”; y además “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción...” (Naciones Unidas, 2015, pp. 17-18).

6.5 Instituciones de Derecho agrario.

En este apartado solo haré mención de las instituciones del Derecho agrario y no desarrollare cada una de ellas, debido a que merecen un tratamiento singular, que permita comprenderlas en toda su complejidad; algo que no podría llevarse a cabo en el presente trabajo debido a asuntos de tiempo y espacio.

Entonces, para exponer con claridad acerca de las instituciones del Derecho agrario, evidentemente se hace necesario acotar acerca del término, para no dar lugar a dudas posteriores.

Por lo que en palabras sencillas sugiero comprender por *Institución* a cada una de las materias de las diversas ramas del derecho. Por ejemplo: la institución de la familia, del matrimonio, de la patria potestad, de las sucesiones, de la propiedad, etc (Cabanella, 2007, p.571). En el mismo sentido lo acotan McCormack & Sarria (2015), al proporcionar la misma definición, aunque extraída de otro diccionario jurídico.

Para McCormack & Sarria (2015) las *instituciones* constituyen la base fundamental para comprender lo que es Derecho agrario como sistema, tomando en cuenta las condiciones naturales del ambiente, los ciclos estacionales, la organización de la producción, las leyes biológicas y la crianza de animal y vegetal entre otros similares.

Acotado el término y la importancia del mismo para la comprensión de la materia, a continuación señalo las instituciones del Derecho agrario contemporáneo.

Victoria (2015) citando a Zeledón, expone que la *empresa agraria* “es una institución del Derecho agrario contemporáneo. Se trata de la primera y fundamental institución de dicha disciplina” (p. 51). En el caso particular de Nicaragua, podría identificarse con las cooperativas agrícolas o pecuarias.

La institución de los *contratos agrarios* permite calificar a la agricultura y así hablar de la agricultura contractual o por contrato (Malanos, 2015).

La propiedad agraria es otra institución del Derecho agrario muy relevante. Por lo que McCormack & Sarria (2015) citando a Zeledón, exponen que en sus inicios fueron los Códigos civiles quienes protegieron a ultranza la propiedad, pero que a partir de que se vinculó los intereses públicos y sociales, *la propiedad agraria* se encuentra limitada, que la diferencia de la propiedad civil.

Resultados y aportes

El análisis de toda la información considerada para esta investigación, me permite concluir lo siguiente:

Es un hecho que el conocimiento habitual y el conocimiento científico son presupuestos de las explicaciones que así consideramos.

Para que el conocimiento sea considerado científico, este debe ser explicativo, sistémico, comprobable, falible, predictivo y útil. Por lo que un conjunto de conocimientos con las características planteadas constituyen una explicación científica.

A partir de las aportaciones de autores de la filosofía de las ciencias, se alteró el paradigma monista del método científico y se admitió un pluralismo metodológico que hizo posible acoger en el seno de la categoría ciencia a los conocimientos de las expresiones del espíritu humano.

Por lo tanto, por ciencia (en términos generales) podemos entender, al conjunto de conocimientos ordenados lógicamente entre sí, de tal forma que adquieren carácter sistémico. Estos conocimientos son obtenidos a través de la aplicación de métodos, que permiten su repetición y por ende su verificación. De dichos conocimientos se deducen premisas, conceptos, leyes y teorías que explican los distintos fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad.

Al conjunto de conocimientos que se dedican al estudio de la realidad histórico-social se les asocia con el nombre de ciencias sociales. Es por lo anterior que dentro de dichas ciencias se pueden ubicar al Derecho, al igual que se podría ubicar a la antropología, arqueología, sociología, ciencias políticas, economía, ecología, geografía humana y social, historia, lingüística, pedagogía, etnología, demografía y a la psicología

La Ciencia jurídica o del Derecho es realmente una ciencia debidamente estructurada: posee un objeto (el ordenamiento jurídico), y una pluralidad de métodos por el carácter pluridimensional de su objeto.

El ordenamiento jurídico es un fenómeno del que no se ha precisado su origen, aunque si hay distintas teorías al respecto. Este puede comprenderse como el

conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en determinado territorio, en determinado momento de la historia, y en un particular sector de la realidad social. Aunque en su sistematización no sólo se ve integrado por normas sino también por principios y enunciados”.

No se pudo comprobar técnicamente la autonomía del Derecho agrario, aunque se logró comprobar la presencia de rasgos que podrían perfilarlo dentro del ordenamiento jurídico nacional; lo cual representa una manifestación jurídica acorde a la actividad agropecuaria, misma que constituye un actividad importante de la economía.

Aventurarse a brindar una definición doctrinal de Derecho agrario, representa un ejercicio sometido al carácter transitorio, por la razón de que su objeto está en proceso de cambio, al igual que sus instituciones.

Se puede decir que el Derecho agrario refiere al conjunto de normas, principios, valores y conceptos que tienen en común regular y condicionar las actividades agropecuarias de un país. En nuestro caso, lo anterior se revela a partir de la revisión de las normas nacionales, aunque no es suficiente para afirma que ello implique la autonomía científica de una rama denominada Derecho agrario.

Nicaragua es un país altamente productivo y la mayoría de su joven población se dedica a la actividad agropecuaria. Por tanto, el desarrollo de esta actividad y su marco normativo es de suma importancia social, económica y jurídica para el país.

La revisión de las fuentes documentales da cuenta del escaso tratamiento académico del derecho agrario en el país. Por lo que se puede decir que a nivel nacional existe asimetría entre el desarrollo de la actividad agropecuaria plasmada en la legislación nacional (Constitución, leyes, decretos, acuerdos y normas técnicas); y el desarrollo del Derecho agrario como una disciplina científica.

No ha habido hasta el día de hoy, algún interés por el desarrollo de dicha disciplina. Razón por la cual decidí llevar a cabo la presente investigación.

Lista de Referencias

- Alvarenga, I. (s/f). El concepto de derecho agrario. Universidad de El Salvador. Recuperado de http://www.fder.edu.uy/contenido/agrario/contenido/doctrina/alvarenga_concepto.pdf
- Anda Gutiérrez, C. (1999). Introducción a las Ciencias Sociales. México: Limusa
- Ansuátegui Roig, F. (2006). Teorías Institucionalista del Derecho (Esbozo de una voz de enciclopedia). Derecho y Libertades, 14, 103-112. Recuperado de <http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3777/DyL-2006-14-La%20Torre.pdf?sequence=1>
- Añon, M., & Bea, E. (1997). Las ramas del ordenamiento jurídico. En De Lucas, J., Añon, M.J., Aparisi, A., Bea, E., Fernández, E., García Añon, J., Martínez de Vallejo, B., Ruiz, M., & Vidal, E. (3ra. Ed.). Introducción a la Teoría del Derecho. España: Tirant lo Blanch.
- Asamblea Nacional. (2014). Texto de la Constitución Política de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas. Publicado en *La Gaceta Diario Oficial*, No. 32, del 18 de febrero del 2014. Nicaragua.
- Asamblea Nacional. (2015). Ley No. 881 del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Publicada en *La Gaceta Diario Oficial* No. 43, del 4 de marzo del 2015. República de Nicaragua.
- Austin, J. (1832). The province of Jurisprudence Determined [La provincial de la jurisprudencia determinada]. London: University of London. Recuperado de <https://books.google.com.ni/books?id=yjXxxaeudhoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Bouroncle, C., Imbach, P., Läderach, P., Rodríguez, B., Medellín, C., & Fung E. (2014). La agricultura de Nicaragua y el cambio climático: ¿Dónde están las prioridades para la adaptación? Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Recuperado de file:///C:/Users/Manuel%20Silva/Documents/respaldo-mmontiel-6-16/Admision%20UCA/IJ%20-

%20Derecho%20Agrario/Bibliografia%20de%20la%20Investigacion/Bibliografia%20relacionada%20a%20la%20agricultura/La%20Agricultura%20de%20Nicaragua%20y%20el%20Cambio%20Climatico.pdf

Chaparro, F. (2001). Conocimiento, aprendizaje y capital social como motor de desarrollo. Brasilia, (1). p. 19-31. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf>

De Cossio y Corral, A. (1991). Instituciones de Derecho civil. España: Civitas.

Díez-Picazo, L. (1996). Fundamentos del derecho civil patrimonial (5ta. Ed). España: Civitas.

Dilthey, W. (1944). El mundo histórico. México: Fondo de Cultura Económica.

Dilthey, W. (1966). Introducción a las ciencias del espíritu. España: Revista de Occidente.

Fernández, E., & Ruiz, M. (1997). El derecho como ordenamiento jurídico. En De Lucas, J., Añon, M.J., Aparisi, A., Bea, E., Fernández, E., García Añon, J., Martínez de Vallejo, B., Ruiz, M., & Vidal, E. (3ra. Ed.). Introducción a la Teoría del Derecho. España: Tirant lo Blanch

Fernández, E., & Ruiz, M. (1997). La norma jurídica. En De Lucas, J., Añon, M.J., Aparisi, A., Bea, E., Fernández, E., García Añon, J., Martínez de Vallejo, B., Ruiz, M., & Vidal, E. (3ra. Ed.). Introducción a la Teoría del Derecho. España: Tirant lo Blanch

García Garrido, M., & Fernández-Galiano, A. (1999). Iniciación al Derecho. España: Universitas.

García Jiménez, L. (2008). Aproximación epistemológica al concepto de ciencia: una propuesta básica a partir de Kuhn, Popper, Lakatos y Feyerabend. Andamios, 4(8), 185-202. Recuperado en 17 de julio de 2016, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000100008&lng=es&tlng=es

Guzmán García, J. (2002). La naturaleza jurídica del matrimonio (Tesis de Doctorado). Universidad de Alcalá, Alcalá, España. Recuperado de <http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/2390>

- Guzmán García, J. (2008). Apuntes de derecho civil: derecho de Personas. Nicaragua: Universidad Centroamericana.
- La Torre, M. (2010). Law as Institution, Law and Philosophy Library 90. United Kingdom. Springer. Recuperado de <http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-6607-8#page-1>
- López Molina, A. (2008). Fundamentación epistemológica de las ciencias humanas (El diálogo de Habermas con Dilthey). Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Enero-Diciembre, 313-327. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133128017>
- Mabel García, S. (2011). El Derecho como Ciencia. Invenio, Junio, 13-38. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87717621002>
- Malanos, N. (2005). Aportes de los contratos agrarios a la empresa agraria familiar. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>
- Mardones, J. & Ursúa, N. (1982). Filosofía de las Ciencias humanas y sociales: materiales para una fundamentación científica. Rubí, Barcelona, España. Anthropos. Recuperado de <http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/manual-MARDONES-Filosofia-de-Las-Ciencias-Humanas-y-Sociales-1.pdf>
- Martínez-Freire, P. (1997). El giro cognitivo en Filosofía de la Ciencia. Revista de filosofía, (17), 105–122. Recuperado el 09 de septiembre de 2015 de <http://revistas.ucm.es/index.php/RESF/article/viewFile/RESF9797120105A/10887>
- McCormack Bequer, M., & Sarria Cruz, S. (2015). Vicisitudes de los institutos en el Derecho agrario contemporáneo, Especial referencia a Cuba. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho

Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>

Muñoz, C. (1996). *Fundamentos para la Teoría General del Derecho*. México. Sersa.

Naciones Unidas. (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre del 2015: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de <http://www.ipu.org/splze/unga16/2030-s.pdf>

Real Academia Española – RAE. (2016). Diccionario en línea. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=AMrJ4zs>

Ruiz Massieu, M. (1987). Derecho agrario revolucionario. Bases para su estudio. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=913>

Ulate Chacón, E. (2009). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria. Costa Rica: Cabalsa

Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua - UPANIC. (2016). III Congreso Nacional Agropecuario: Nuevas tecnologías para el agro. Managua: LA PRENSA.

Victoria, M. (2015). De la empresa agraria tradicional a sus nuevos perfiles. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>

Victoria, M. (2015). De la empresa agraria tradicional a sus nuevos perfiles. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>

Villabella Armengol, C. (2009). La investigación científica en la ciencia jurídica. Sus particularidades. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de

Puebla A.C., Sin mes, 5-37. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963002.pdf>

Villabella Armengol, C. (2014). Investigación y comunicación científica en la ciencia jurídica. Nicaragua: Universidad Centroamericana - UCA.

Zeledón Zeledón, R. (2015). De las escuelas clásicas a los institutos y la teoría general, hacia una “Teoría pura del Derecho Agrario” contemporáneo. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>

Zeledón Zeledón, R. (2015). Presentación al libro. En M.Victoria (Comp.). Institutos de Derecho agrario contemporáneo y Justicia agraria. Memorias del IX Congreso Americano de Derecho agrario. Panamá: Comité Americano de Derecho Agrario. Instituto Panameño de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena. Recuperado de <http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/docs/memixconam.pdf>